

SOCIEDAD CIVIL Y PODER POLÍTICO EN REPÚBLICA DOMINICANA

Civil society and political power in the Dominican Republic

Rosario ESPINAL
Temple University
✉ espinal@temple.edu

Jana MORGAN
University of Tennessee
✉ janamkelly@gmail.com

Jonathan HARTLYN
University of North Caroline
✉ hartlyn@unc.edu

BIBLID [1130-2887 (2010) 56, 37-58]
Fecha de recepción: 27 de septiembre del 2010
Fecha de aceptación: 8 de diciembre del 2010

RESUMEN: República Dominicana registra un alto nivel de asociacionismo social y activismo político en el contexto latinoamericano. Esto, sin embargo, no se ha traducido en mayor capacidad de la sociedad civil dominicana para reformar el sistema político y mejorar la democracia. Con este planteamiento de fondo, se exploran dos preguntas. La primera es si existe una tendencia a la coparticipación en las organizaciones sociales y políticas que reduce la capacidad de presión de la sociedad civil sobre los partidos y el Estado. La segunda refiere a la naturaleza del vínculo de los participantes en organizaciones de la sociedad civil con el Estado y los partidos. El análisis muestra el involucramiento de un segmento de participantes en actividades cívicas, también en actividades partidarias y en redes clientelares.

Palabras clave: sociedad civil, partidos políticos, democracia, clientelismo, República Dominicana.

ABSTRACT: In the Latin American context, the Dominican Republic displays high levels of civic engagement and political activism, yet they have not translated into a civil society that is able to exercise considerable influence in reforming the political system or enhancing democracy.

Building on this observation, this article explores two questions. The first is if there is tendency toward dual participation in civic and political organizations, which reduces civil society's ability to pressure political parties and the State. The second refers to the nature of the connections that civil society participants have with the State and with political parties. The analysis demonstrates that an important segment of the population that participates in civic associations also participates in political parties and in clientelist networks.

Key words: civil society, political parties, democracy, clientelism, Dominican Republic.

I. INTRODUCCIÓN¹

El estudio de los movimientos sociales, sobre todo sindical y barrial, tiene una larga tradición en las ciencias sociales dominicanas, pero en las últimas dos décadas se ha producido un cambio sustancial en la dinámica social al surgir numerosas organizaciones de la sociedad civil que han reemplazado a los viejos movimientos. Algunas de estas organizaciones tienen incidencia en los medios de comunicación y magnifican así su fuerza, pero la mayoría se encuentran esparcidas en todo el país y carecen de mecanismos eficaces de articulación. Las más comunes son organizaciones religiosas, juntas de vecinos, asociaciones de padres de la escuela y grupos de mujeres.

Al evaluar los datos de las encuestas regionales como el Barómetro de las Américas, se encuentra que República Dominicana registra un alto nivel de asociacionismo social y de activismo político. Sin embargo, esto no se ha traducido en mayor capacidad de la sociedad civil para reformar el sistema político y mejorar la calidad de la democracia, ni tampoco para gestar un movimiento social cuestionador del sistema como ha sucedido en otros países latinoamericanos.

De aquí surge la interrogante: ¿por qué la sociedad civil dominicana no ha podido impulsar grandes reformas en una función complementaria, «desde dentro», con los partidos políticos y el Estado, ni tampoco en una estrategia de confrontación «desde fuera»? Con esta interrogante de trasfondo, se exploran dos preguntas para dilucidar la paradoja de una relativa alta participación social y política, y la baja incidencia de la sociedad civil en la formulación e implementación de políticas públicas para mejorar la democracia.

La primera pregunta es si existe una tendencia a la coparticipación en las organizaciones sociales y políticas que podría reducir la capacidad de presión de la sociedad civil sobre los partidos y el Estado, y neutralizar la combatividad de las organizaciones de la sociedad civil. La segunda refiere a la naturaleza del vínculo de los participantes en organizaciones de la sociedad civil con el Estado, así como el peso de la relación clientelar que hace a las organizaciones sociales dependientes del Estado y de los partidos. El análisis se aborda con datos de la encuesta Barómetro de las Américas 2010².

1. Rosario Espinal agradece a Temple University el apoyo durante el verano 2010 para realizar sus investigaciones y a Jennifer McGovern por su asistencia. Los autores agradecen las sugerencias de los evaluadores anónimos de *América Latina Hoy*, *Revista de Ciencias Sociales*.

2. El Barómetro de las Américas es una encuesta del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) que tiene como objetivo medir los valores democráticos y el comportamiento político

II. SOCIEDAD CIVIL Y DEMOCRACIA

Desde la década de 1980, muchos estudios sobre democratización han resaltado el papel de la sociedad civil en las transiciones y en los procesos de consolidación (Diamond, 1994, 1999; Foley y Edwards, 1996; Fukuyama, 2001; Putnam, 1993, 1995; Taylor, 1990; Tusalem, 2007; Warren, 2001, entre otros). Parten del supuesto de que las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel importante en la construcción de ciudadanía, en la formación de capital social o en la oposición a los gobiernos que se resisten a promover reformas democráticas.

Por estas razones argumentan que una sociedad civil fuerte e independiente de los partidos políticos y del Estado contribuye a mejorar el sistema institucional, las políticas públicas y, por ende, la democracia. Además, estas ideas han contribuido a forjar nuevas organizaciones sociales y han motivado un flujo de financiamiento internacional a instituciones que representan diversos grupos sociales o áreas temáticas (Sabatini, 2002; Bobes, 2010; Revilla Blanco, 2010).

En este sentido, la sociedad civil ha sido tema controversial por las expectativas que sobre ella se generan y los roles que se le atribuyen (Tusalem, 2007). Unos la ven como fuente de civilidad democrática en la tradición de Tocqueville (2000 [1840]) y Almond y Verba (1963), o como factor crucial para mejorar la gestión gubernamental en la versión de Putnam (1993). Foley y Edwards (1996) denominan esta perspectiva Sociedad Civil I porque enfatizan una especie de relación armónica entre participación cívica y resultados democráticos. Otros ven la sociedad civil como motor de desarrollo democrático, pero muchas veces en antagonismo con partidos y gobiernos desinteresados en profundizar la democracia; es la versión popularizada durante la resistencia a los regímenes comunistas de Europa Oriental a principios de la década de 1980, que Foley y Edwards denominan Sociedad Civil II.

Desde otra perspectiva, algunos autores conciben la sociedad civil como parte de la estructura de poder que negocia o coopera con los diversos agentes políticos (Hochstetler y Friedman, 2008), mientras otros la ven como posible fuente de problemas para la democracia en la tradición de Huntington (1975). Es decir, a veces la sociedad civil se percibe como componente funcional de las democracias restringidas, donde se aceptan sin muchos cuestionamientos los límites de la participación social y política, y otras como un elemento desafiante del sistema (e incluso desestabilizador) hacia la construcción

en las Américas con muestras nacionales probabilísticas. En la actualidad se realizan encuestas en casi toda la región y se entrevistan más de 40.000 personas. En la República Dominicana, los estudios se realizan desde el año 2006. La muestra del Barómetro de las Américas 2010 para República Dominicana fue diseñada por Gallup República Dominicana, s.a. en consulta con expertos en materia de muestreos bajo la dirección general del Dr. Mitchell A. Seligson, director de LAPOP en la Universidad de Vanderbilt. El trabajo de campo fue realizado por Gallup República Dominicana en el mes de febrero de 2010. El tamaño de la muestra fue de 1.500 personas, divididas en cuatro regiones: metropolitana, norte, este y sur. LAPOP permite el uso de su base de datos a los investigadores. Para más información al respecto, visitar la página *web* de LAPOP: <http://www.vanderbilt.edu/lapop/index.php>.

de una democracia participativa (Hengstenberg y Maihold, 2002). Estas distintas visiones sobre el papel de la sociedad civil han coexistido en las últimas décadas a pesar de la aparente contradicción en objetivos. De ahí que el estudio empírico sea vital para comprender la dinámica del proceso de democratización en cada país específico y el papel de la sociedad civil.

Cuando la sociedad civil es fuerte y tiene capacidad de presión en el sistema político, ya sea mediante las instancias institucionalizadas o la movilización, logra expandir los beneficios sociales a los grupos que representa. Pero cuando es débil, ya sea por su bajo nivel organizativo, o porque se supedita a los dictados de los partidos políticos o el Estado, resulta difícil que incida de manera significativa en las reformas. Por otro lado, las organizaciones que conforman la sociedad civil difieren en sus formatos y propósitos. Unas operan como grupos de interés a favor de sus representados, es el caso por ejemplo de los sindicatos, las organizaciones empresariales y las organizaciones de mujeres. Otras se plantean objetivos de carácter general como las reformas políticas para lograr transparencia gubernamental. Unas tienen características de ONG, con énfasis en el trabajo técnico en temáticas específicas; otras operan como organizaciones laborales, profesionales, de identidad o territoriales; y otras como movimiento cívico.

Las transiciones políticas de las últimas décadas en América Latina han contado con la participación de la sociedad civil en distintas modalidades e intensidad. Es común que durante los primeros años de la transición se produjeran movilizaciones y un aumento de la actividad asociativa para terminar con los regímenes autoritarios y promover la democracia. Una vez concluida la etapa de activación social y la transición, el desafío para la sociedad civil ha sido qué hacer y cómo interactuar con el Estado y los partidos políticos; ya sea para avanzar la causa general de la democratización o para articular y defender intereses de grupos que reclaman derechos.

En este contexto, la efectividad de la sociedad civil estará muy ligada a su fortaleza (la magnitud de su membresía y los recursos disponibles), así como a la fuerza de los partidos políticos y el Estado. Se puede dar entre ellos una relación de colaboración o de resistencia. Planteado en sentido más amplio, la sociedad civil, en tanto agente de acción colectiva, opera en un contexto económico y político-institucional que marca la dinámica de relación entre estas instancias, mientras los procesos de interacción política señalan el tipo de democracia que se forja, con distintos niveles de inclusión o exclusión social (Revilla Blanco, 2010).

III. LA SOCIEDAD CIVIL DOMINICANA Y LA DEMOCRATIZACIÓN

República Dominicana no ha sido ajena a los procesos de transformación de la acción colectiva en el marco de los cambios económicos y políticos de la región latinoamericana. La caída de la dictadura de Rafael Trujillo en 1961 produjo un alto nivel de movilización y conflictividad social. El objetivo era eminentemente político porque se buscaba terminar con los remanentes del trujillismo. Conjuntamente, se formaron organizaciones sociales en el nuevo clima de libertad; sobre todo, organizaciones empresariales,

sindicales y cívicas. Las elecciones democráticas en diciembre de 1962 sirvieron de catalizador de las demandas populares de cambio, pero el golpe de Estado en septiembre de 1963 abrió otro capítulo de conflictividad política, marcado por la represión y la sucesión de gobiernos de facto. Esta conflictividad irresuelta culminó con la guerra civil de 1965, interrumpida por una ocupación militar norteamericana.

El gobierno de los Doce Años de Joaquín Balaguer (1966-1978) se caracterizó por la represión sistemática a los sectores de la izquierda y a las organizaciones sociales vinculadas a ella, en particular, a los sindicatos. El Estado no tenía un proyecto nacional-popular y, por tanto, no daba cabida a las demandas ni a las protestas populares (Espinal, 1987; Lozano, 1985). Durante todo ese período, el activismo político de oposición al gobierno de Balaguer se impuso sobre las modalidades de activismo social, excepto en el marco del asistencialismo público. El Estado suplía beneficios clientelistas a pequeños segmentos populares y organizaba grupos de campesinos y amas de casa con fines desarrollistas (Duarte y Pérez, 1979). Las políticas económicas estaban diseñadas para favorecer al empresariado, que en el período de Trujillo había quedado constreñido por las políticas de concentración de riqueza del dictador (Espinal, 1998; Hartlyn, 1998; Moya Pons, 1992).

Después de la represión que caracterizó a la política dominicana en las décadas de 1960 y 1970, la transición política de 1978 facilitó el resurgimiento de la vida asociativa en el país y se inició un proceso organizativo y de estrategias reivindicativas de distintos sectores sociales. La naturaleza y forma de esos movimientos ha experimentado cambios desde 1978 en función de varios factores: (1) la situación económica, (2) el partido en el poder, (3) las estrategias de los gobiernos para ejercer control sobre la sociedad movilizadora, (4) el tipo de relación entre los partidos políticos y las organizaciones sociales y (5) el financiamiento disponible para las organizaciones sociales (Espinal, 2001).

De manera general, se pueden identificar cinco períodos en el proceso de activismo y movilización social a partir de la transición democrática en 1978. El primero abarcó el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de 1978 a 1982. Se caracterizó por el auge de la organización obrera y empresarial y se produjeron fuertes tensiones entre el empresariado y el gobierno ante la creciente sindicalización. El segundo corresponde al gobierno del PRD de 1982 a 1986. Se caracterizó por el creciente descontento popular con la crisis económica y las medidas de ajuste. Se produjo un fuerte, aunque breve, movimiento de protesta callejera que fue reprimido por el gobierno.

El tercero se caracterizó por el surgimiento y organización del movimiento popular, fundamentalmente de extracción urbana de barrios marginados, que presentó múltiples demandas socioeconómicas a través de huelgas nacionales organizadas por el Colectivo de Organizaciones Populares. Estas protestas se produjeron en el contexto del retorno de Joaquín Balaguer al poder en 1986, quien impulsó un programa económico de expansión del gasto público que produjo alta inflación entre 1987 y 1990. Un fenómeno nuevo ante la crisis de representatividad política en esos años fue el «diálogo tripartito», que contó con la participación del sector empresarial, sindical y gubernamental, y con la mediación de la Iglesia Católica (Núñez Collado, 1997). En este

diálogo, los sectores barriales movilizados no fueron reconocidos como interlocutores ni convocados a la mesa de negociación.

El cuarto se caracterizó por la incorporación de los sectores medios a la lucha por la consolidación de la democracia después de la cuestionada reelección de Balaguer en 1990. Las actividades entre 1990 y 1996 tuvieron fundamentalmente un carácter cívico-democrático y buscaron incidir en las reformas al sistema político y la transparencia electoral. Se produjo aquí una modalidad nueva de movimiento social que emergió bajo el concepto de «sociedad civil», es decir, un movimiento con mayor autonomía de los partidos políticos y del Estado y con un sesgo de crítica hacia ellos. La conquista más importante de este movimiento fue lograr mayor transparencia electoral a partir de 1996.

El quinto se inició a fines de la década de 1990, durante el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Se ha caracterizado por una diversidad de movimientos sociales, entre ellos: (1) los esfuerzos de organizaciones de sectores medios por consolidar la institucionalidad democrática; (2) las protestas callejeras esporádicas de grupos sociales en barrios marginados y poblados, en demanda por reivindicaciones específicas para sus comunidades, pero sin una efectiva coordinación nacional; (3) las huelgas de grupos profesionales por reivindicaciones laborales, sobre todo de médicos; y (4) protestas con un fuerte componente juvenil en torno a temas nuevos como el medio ambiente y los derechos sexuales. Es decir, la diversificación de las luchas y la carencia de coordinación nacional de estos esfuerzos han caracterizado los últimos 15 años.

Las fortalezas y debilidades de estos movimientos en sus distintas modalidades de acción colectiva han sido analizadas en diversos trabajos de investigación (Báez, 1993; Betances, 2009; Cassá, 1990; Cassá y Murphy, 1995; Ceballos, 1995; De Peña Valdez, 1998; Espinal, 1995, 1998, 2001; Faxas, 1995, 2007; Ianni, 1985, 1987; Moya Pons, 1992; Oviedo y Espinal, 1986; Pérez y Artiles, 1992; Vargas, 1994). Lo que no se ha estudiado en detalle son las características de los participantes de las organizaciones de la sociedad civil y sus vínculos con los partidos y el Estado. Examinar esta relación es relevante para comprender por qué en una sociedad que aparece en las encuestas comparativas con un nivel de participación cívica relativamente alto, no se observa mayor protagonismo de la sociedad civil frente a los partidos y el Estado, que se traduzca en reformas concretas para mejorar el nivel de vida de la población y la institucionalidad democrática.

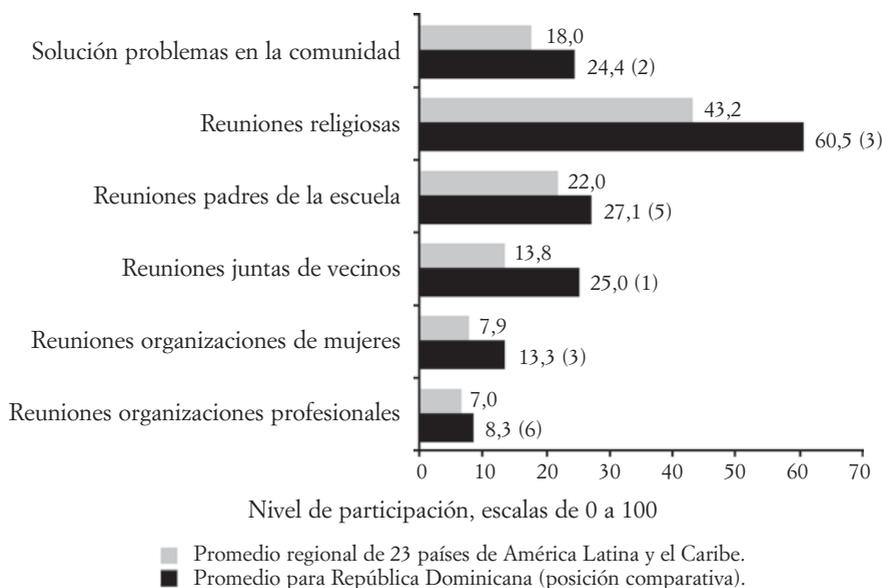
IV. LA PARADOJA

En República Dominicana se observa una situación paradójica en lo relativo a la sociedad civil y la política. Por un lado, hay evidencia empírica de que en la sociedad dominicana hay amplia vida organizativa. Por ejemplo, en la encuesta del Barómetro de las Américas 2010, que incluye 23 países de América Latina y el Caribe³, República

3. El total es de 24 países de América Latina y el Caribe pero la encuesta de Haití se retrasó por el terremoto. Por eso los datos de Haití no se incluyen en los gráficos comparativos.

Dominicana encabeza la región en participación en actividades de organizaciones religiosas y en comités de mejora a la comunidad (conocidas como juntas de vecinos). Ocupa el segundo lugar en participación ciudadana en la solución de problemas comunitarios, el tercer lugar en participación en grupos de mujeres y el cuarto lugar en participación en asociaciones de padres de la escuela (ver el Gráfico 1). Más aún, esta organización cívica dominicana ha aumentado ligeramente de 2006 a 2010, aunque el incremento no es estadísticamente significativo.

GRÁFICO I. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN REPÚBLICA DOMINICANA Y OTROS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2010



Fuente: Barómetro de las Américas (LAPOP 2010).

Por otro lado, aunque los partidos políticos reciben la peor evaluación entre las instituciones dominicanas⁴, los datos muestran que han gozado de amplia simpatía en la población. En la comparación regional con datos del Barómetro 2006 y 2008, República Dominicana se colocó en el primer lugar de simpatía partidaria: el 60% y el 70% de los ciudadanos, respectivamente, dijo simpatizar por un partido político. En el 2010, el país ocupó el segundo lugar de simpatía partidaria con un 54,5% (ver el Gráfico II). Aunque el dato muestra que el nivel de simpatía disminuyó, sigue siendo alto en el

4. En el Barómetro de las Américas 2010, los partidos políticos recibieron una evaluación promedio de 33,1 puntos en relación al nivel de confianza, la menor de todas las instituciones consideradas.

contexto latinoamericano, donde el promedio regional de simpatía partidaria es del 34,1%. Sin embargo, en la comparación sobre confianza en los partidos, República Dominicana se coloca en una posición intermedia: ocupa la posición 14 de 23 países. Esto indica que el nivel de simpatía en los partidos de la población dominicana es mayor en términos comparativos que la confianza en ellos.

Al considerar otras preguntas de la encuesta se encuentra que República Dominicana ocupó el primer lugar en el porcentaje de la población que dijo haber trabajado por un partido o candidato en las últimas elecciones presidenciales de su país (19,9%); el segundo lugar en el porcentaje que dijo haber asistido a reuniones de organizaciones políticas (21,7%); y el tercer lugar en el promedio de interés en la política (44,3 puntos). Aunque ocupó el noveno lugar en el porcentaje de votación en las últimas elecciones presidenciales, el 74% de participación electoral es relativamente alto. Por otro lado, República Dominicana ocupó el primer lugar en el porcentaje de la población que dijo haber asistido a una reunión municipal (27,3%) y el séptimo lugar (relativamente alto en una comparación entre 23 países) en el porcentaje que dijo haber presentado una petición al gobierno municipal (15,1%).

GRÁFICO II. PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN REPÚBLICA DOMINICANA
Y OTROS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2010



Fuente: Barómetro de las Américas (LAPOP 2010).

A partir de estos datos surge la interrogante: ¿Por qué este asociacionismo social y activismo político que captan las encuestas no se ha traducido en una mayor capacidad de la sociedad civil dominicana para reformar el sistema político y mejorar la democracia, ni tampoco para gestar un movimiento social cuestionador del sistema como ha sucedido en otros países? Planteado de otra manera, aunque se reconoce que la estabilidad del sistema de partidos dificulta que la sociedad civil tenga un papel transformador mediante la confrontación («desde fuera»), ¿por qué la sociedad civil dominicana no ha podido insertarse de manera más exitosa para lograr reformas democráticas en una función complementaria, «desde dentro», con los partidos y el Estado? (Hochstetler y Friedman, 2008: 2).

Una posible explicación que se deriva de los datos presentados en los Gráficos 1 y 2 es que la sociedad dominicana se organiza más de lo que se moviliza. Como se observa en el Gráfico 2, República Dominicana ocupa una posición relativamente baja (n.º 17) en la participación en protestas públicas. El promedio regional de participación no es alto (7,4%), pero para el caso dominicano llama la atención que la posición comparativa es relativamente baja, a diferencia de la posición en los otros ítems participativos. En un sistema de partidos políticos relativamente estable y que todavía exhibe un nivel de simpatía relativamente alto, no debe sorprender la baja movilización social fuera de ellos. Este podría ser un factor clave para la baja efectividad de la sociedad civil dominicana en inducir cambios sociales. Es decir, la sociedad política dominicana no se siente suficientemente presionada, ni mucho menos amenazada, por la sociedad civil, y por eso no se ve obligada a dar respuesta a las expectativas de cambio de la población que las organizaciones sociales articulan públicamente.

Una explicación complementaria es que no existe una diferenciación significativa entre las instancias de participación en la sociedad civil y en los partidos, lo cual impide que la sociedad civil tenga una posición de beligerancia política. Este factor se analiza con datos empíricos más adelante.

V. EXCLUSIÓN SOCIAL

La dificultad de la sociedad civil dominicana para incidir y generar grandes cambios se evidencia con ejemplos. Aquí se resumen dos situaciones que expresan los déficits. En el aspecto socioeconómico, llama la atención que en las últimas décadas República Dominicana ha sostenido uno de los niveles más altos de crecimiento económico en América Latina. Sin embargo, esto no se ha traducido en una mejoría sustancial en las condiciones de vida para la población. La situación económica es mejor que hace 50 años, pero la población carece de servicios adecuados en educación, salud, seguridad social y oferta de energía eléctrica, entre otros; asimismo, el nivel de desigualdad económica y social sigue siendo alto.

Este punto lo expresa claramente el economista Miguel Ceara-Hatton en el Prólogo del reciente informe sobre Política Social de la Oficina de Desarrollo Humano

(ODH) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en República Dominicana:

La sociedad dominicana ha tenido avances innegables en materia de derechos civiles y políticos. Aún en materia de indicadores sociales e institucionales ha habido progresos; sin embargo, seguimos viviendo en una sociedad donde el poder económico, social e institucional está distribuido de manera muy inequitativa, y los mecanismos de representación en el sistema político se han distorsionado, alterando la lealtad a la ciudadanía y vaciándose de contenidos. Lo peor es que nuestra sociedad se ha hecho cada vez más excluyente, generando cada vez más riqueza. El orden de desigualdad afecta a nuestras instituciones y debilita el Estado de Derecho, convirtiendo al desarrollo humano en una cuestión de poder, cuando debería ser una cuestión de derechos, de forma que el acceso a las oportunidades no dependa del poder personal o del grupo al que se pertenece (Cera-Hatton en ODH-PNUD, 2010: IX).

Según este informe (ODH-PNUD, 2010: 33), la concentración del ingreso se ha mantenido elevada en República Dominicana y la magnitud de la brecha entre los más ricos y los más pobres es de las más elevadas en términos comparativos y tiende a crecer. Para el año 2000, el 30% de los hogares dominicanos más ricos captaba el 66% del ingreso nacional y para el año 2006, el 69,9%.

En el campo político, un ejemplo de exclusión y de relativa debilidad de las organizaciones sociales es el escaso poder que han tenido para moldear las reformas constitucionales realizadas en el país en 1994, 2002 y 2009-2010. La de 1994 se realizó en medio de una crisis postelectoral por el alegado fraude del gobierno de Balaguer contra el PRD. En el diseño de la reforma, realizada «al vapor», participó la cúpula de los tres partidos principales: el PRD, el PLD y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). En pocos días, los líderes partidarios pactaron la reforma, que luego, en un evento público en el Palacio Nacional, refrendaron las organizaciones más notables de la sociedad civil (Hartlyn, 1998).

Luego, en el año 2001, el presidente Hipólito Mejía del PRD nombró una Comisión para discutir reformas constitucionales que habían sido propuestas durante varios años por la sociedad civil. Esto también se hizo con la mediación de monseñor Agripino Núñez Collado, el artífice de casi todos los diálogos que cuentan con el aval del gobierno. Pero después de ganar las elecciones legislativas y municipales de 2002, Mejía procedió con su mayoría parlamentaria a modificar la Constitución con el único objetivo de poder presentarse como candidato presidencial en el 2004, elección que perdió.

En la más reciente reforma constitucional, que promovió y patrocinó el presidente Leonel Fernández también con la coordinación de monseñor Agripino Núñez Collado, se hizo una consulta nacional en el 2009 dirigida por oficinas dependientes del despacho presidencial, sin ningún mecanismo que asegurara que los resultados tendrían un peso significativo en la elaboración del texto. Al final, la reforma constitucional se pactó en sus puntos más álgidos entre el presidente Fernández y el presidente del PRD, Miguel Vargas, el 14 de mayo de 2009, sin la participación de representantes de

la sociedad civil, como documenta ampliamente la prensa alrededor de esa fecha. La nueva Constitución fue proclamada el 26 de enero de 2010.

La persistencia de grandes desigualdades socioeconómicas y la exclusión de amplios sectores sociales de los procesos de reforma constitucional son ejemplos importantes de la limitada capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para negociar con los partidos y el Estado los cambios socioeconómicos y políticos.

VI. HIPÓTESIS

La estabilidad del sistema de partidos dominicano es evidente en el contexto comparativo latinoamericano y se ha producido en condiciones de escasa diferenciación ideológica después de la transición democrática. El clientelismo y las valoraciones de la población sobre el desempeño económico del gobierno se señalan como factores importantes, sobre todo en el contexto de una estructura social marcada por la migración de dominicanos hacia fuera y de haitianos hacia dentro, que desincentiva la movilización social (Morgan, Hartlyn y Espinal, manuscrito a publicarse en 2011).

Desde otro ángulo, Choup (2003, 2006) ha planteado, a partir de un estudio de organizaciones comunitarias en una zona marginada de Santo Domingo, que las organizaciones de base, aunque reclaman democracia, muchas veces asumen el clientelismo y el presidencialismo típicos del sistema político dominicano para servir mejor los intereses de sus comunidades. Los mismos líderes de estas organizaciones expresaron en el estudio que los políticos ignoran las demandas y necesidades de la ciudadanía por las debilidades de la sociedad civil. Uno de los argumentos centrales de Choup (2003) es que la democracia en las organizaciones de la sociedad civil está constreñida por la limitada democracia de la sociedad política. Por otro lado, aunque hay algunos líderes cívicos independientes, la mayoría busca establecer vínculos con el Estado y los partidos, o formar relaciones clientelistas con un partido (Choup, 2006).

Los artículos de Choup ofrecen evidencia a favor del argumento de que las prácticas clientelistas de la sociedad civil, tales como hacer demandas personales a líderes políticos que entregan beneficios de manera arbitraria, son remanentes del pasado autoritario y reflejo de la desigualdad estructural y la mínima institucionalidad en que operan. El país no cuenta aún con instituciones autónomas y eficaces dentro o fuera del Estado que permitan a los líderes de las organizaciones de la sociedad civil presentar demandas a instituciones públicas a través de canales formales y que, en base a criterios objetivos, se asignen recursos. Esta situación deja poco margen a la sociedad civil para usar canales democráticos. Los líderes sociales, conscientes de que hay muchas instituciones con funciones similares, no saben quién está a cargo ni quién puede resolver. Además, reina la improvisación, el clientelismo y la corrupción. Una lección que se extrae de esta investigación es la necesidad de analizar mejor el tipo de relación entre la sociedad civil, los partidos y el Estado para comprender el escaso avance en la institucionalidad democrática.

El escaso desarrollo interno de las organizaciones de base dominicanas es otro serio problema que limita su efectividad. Según Vargas (1994), la mayoría de las organizaciones

se reúnen pero no tienen organismos, subdivisiones ni adecuada distribución de funciones o responsabilidades. Esto no es producto de una democracia igualitaria, sino de una cultura verticalista. Se realizan muchas elecciones para rotar directivas, pero la reelección es una práctica frecuente. En general, este estudio establece tres problemas fundamentales de las organizaciones de base dominicanas: escasos recursos económicos, falta de democracia interna y bajo nivel de capacitación. De ahí que en las entrevistas realizadas a directivos de organizaciones señalaran que el logro más importante de sus organizaciones era que existían.

Como se sugirió anteriormente, hay una tendencia en el análisis social a asumir que los actores que conforman la sociedad civil son distintos a los que militan en los partidos, y, por ende, se le atribuye a la sociedad civil el propósito, o incluso la capacidad, de enfrentarse a los partidos y al gobierno en sus esfuerzos por promover la democracia. Sin embargo, en países como República Dominicana, donde se registra un nivel relativamente alto de asociacionismo social y activismo político, falta conocer mejor qué sucede en la relación entre la sociedad civil, partidos políticos y el Estado, para explicar por qué la sociedad civil no registra muchas conquistas en el campo de las reformas democráticas, ya se trate de mejoría en los servicios públicos o de transparencia gubernamental.

Podría ser que la sociedad civil, a pesar de su alto nivel de participación, no logra incidir de manera determinante en las decisiones gubernamentales porque el sistema de partidos no ha enfrentado una fuerte crisis de representatividad, y, por tanto, no necesita dar amplia cabida a las organizaciones sociales, que, por naturaleza, son muchas y agregan intereses diversos. Por ejemplo, Hochstetler y Friedman (2008) en su estudio sobre Bolivia, Argentina y Brasil muestran apoyo a la hipótesis de que el nivel de representación no partidaria, es decir, a través de organizaciones de la sociedad civil, se relaciona con el nivel de crisis de representatividad de los partidos: a mayor crisis de los partidos, mayor involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil en un rol de representación. Por el contrario, en contextos de crisis moderadas, las organizaciones de la sociedad civil no reemplazan a los partidos como instancias de representación, o ni siquiera lo intentan, aunque pueden tener importantes funciones de representación en complementariedad con los partidos. En el caso dominicano, las organizaciones de la sociedad civil no parecen jugar ni siquiera un papel importante de complementariedad para producir cambios sociales.

Con los datos y argumentos presentados, se examinó empíricamente la hipótesis siguiente para dilucidar la paradoja de por qué la sociedad civil dominicana no logra mayor impacto sobre las reformas. Se plantea que la tendencia a la coparticipación cívica y política reduce la capacidad de presión de la sociedad civil sobre los partidos y el Estado por la relación clientelar, que torna las organizaciones sociales sumisas ante esos poderes. Todo el análisis se realizó con datos del Barómetro de las Américas 2010.

VII. LOS DATOS

La encuesta contiene una serie de preguntas que permiten evaluar la membresía dual en organizaciones sociales y políticas. Se utiliza la serie de preguntas sobre participación ciudadana que incluye participación en la solución de problemas comunitarios y asistencia a reuniones en cuatros tipos de organizaciones: asociaciones de padres de la escuela, juntas de vecinos, organizaciones profesionales y organizaciones de mujeres. Para la participación política se utilizan dos preguntas: la asistencia a reuniones de partidos y la pertenencia a un partido.

El Gráfico III muestra la relación entre participación cívica y la asistencia a reuniones de partidos. En todos los ítems de participación social señalados con asterisco, se observa una relación estadísticamente significativa ($p < ,05$) con la asistencia a reuniones de partidos. Es decir, los datos muestran que la asistencia a reuniones de partidos es mayor entre las personas que participan en la solución de problemas de la comunidad que entre quienes no participan; entre los que asisten a reuniones de padres de la escuela, de juntas de vecinos, de organizaciones profesionales y de organizaciones de mujeres, que entre los que no asisten. La última barra indica que participar por lo menos en una actividad cívica de las mencionadas duplica la posibilidad de asistencia a reuniones políticas. Quienes nunca han participado en una actividad cívica registran un 21,5% de participación en reuniones de partidos, comparado con el 43,9% entre quienes han participado.

GRÁFICO III. PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS POR PARTICIPACIÓN EN VARIAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD CIVIL, 2010



* Diferencias significativas entre los que participan y los que no participan.

Fuente: Cálculos de los autores con datos del Barómetro de las Américas (LAPOP 2010).

Estos datos reflejan que quienes participan en actividades cívicas no están fuera de la dinámica de los partidos políticos, es decir, que la sociedad civil dominicana no es externa a los partidos, sino que muchos de sus miembros participan también en las actividades político-partidarias.

Cuando se utilizan las mismas variables de participación cívica en relación con la membresía a un partido político, encontramos las mismas tendencias que en el caso de asistencia a reuniones políticas, aunque las relaciones estadísticas son más débiles. Quienes nunca han participado en una actividad cívica registran un 22,2% de membresía en partidos políticos, comparado con un 32,7% en el caso de quienes han participado en por lo menos una actividad cívica. La diferencia de 10,5 puntos porcentuales (32,7-22,2) es estadísticamente significativa, pero no es tan alta como en el caso de la participación en reuniones de partidos, donde la diferencia es de 22,4 puntos (43,9-21,5).

Para conocer sobre la naturaleza del vínculo de los participantes en las organizaciones de la sociedad civil con el Estado, se utilizan dos preguntas del Barómetro de las Américas 2010. Una indaga sobre las ofertas clientelistas que hacen los partidos y los candidatos en época de campaña electoral y la otra sobre la Tarjeta de Solidaridad que otorga el gobierno a los pobres para canalizar subsidios de alimentación, asistencia escolar, consumo de gas y a personas retiradas de la actividad económica. Estos subsidios oscilan generalmente entre 20 y 50 dólares mensuales. Este análisis parte de que hay formas de organización de la sociedad civil, como es el caso de las marcadas por lazos clientelistas, que pueden dificultar las reformas.

El Gráfico IV muestra una relación estadísticamente significativa ($p < ,05$) señalada con asteriscos entre participar en actividades cívicas y haber recibido alguna oferta clientelista. Igual sucede, pero de manera más pronunciada, entre las personas que participan políticamente, ya sea como miembros de partido o que asisten a reuniones de partidos. Es decir, participar en actividades cívicas y políticas aumenta de manera estadísticamente significativa la probabilidad de recibir ofertas clientelistas durante las campañas electorales. Además, quienes participan en los partidos, independientemente de cuál partido, tienen más probabilidad de recibir ofertas clientelistas que quienes no participan en ninguno.

Esto indica que quienes participan en las actividades cívicas no son particularmente diferentes a quienes participan en las actividades políticas en lo relativo a las ofertas clientelistas. Los datos muestran que participar en alguna de esas instancias aumenta la posibilidad de recibir ofertas clientelistas con el propósito de generar apoyo político. Por ejemplo, las personas que participan en reuniones de juntas de vecinos y organizaciones profesionales muestran un porcentaje de ofertas (23,2% y 23,1% respectivamente) similar al de las personas que dijeron pertenecer a un partido político (25%), o a quienes mencionaron asistir a reuniones de partidos (25,6%). En el caso de las otras actividades cívicas los porcentajes oscilan entre el 20,3% en el caso de las organizaciones de padres de la escuela y el 21,9% en la participación para la solución de problemas comunitarios.

GRÁFICO IV. DISTRIBUCIÓN DE LAS OFERTAS CLIENTELISTAS POR PARTICIPACIÓN CÍVICA Y POLÍTICA, 2010



* Diferencias significativas entre los que participan y los que no participan.

Fuente: Cálculos de los autores con datos del Barómetro de las Américas (LAPOP 2010).

Los datos del cruce de participación cívica y política con la Tarjeta de Solidaridad que aparecen en el Gráfico V muestran que hay una relación estadísticamente significativa con asistir a reuniones de partidos y ser miembro de un partido (del gobernante y de la oposición). Mientras el 41,1% de quienes asisten a reuniones de partidos tienen la Tarjeta, el 30,3% de quienes no asisten la tienen. Asimismo, mientras el 35,5% de quienes son miembros de partido la tienen, el 26,4% de quienes no son miembros la tienen.

En el caso de la participación cívica, no hay tantas diferencias estadísticamente significativas como en el caso de las ofertas clientelistas. Hay diferencia significativa entre tener la Tarjeta y asistir a reuniones de asociaciones de padres de la escuela y de juntas de vecinos, pero no en el caso de participar en organizaciones profesionales y de mujeres (por eso no aparecen asteriscos en esos ítems), ni tampoco en la categoría general de asistir por lo menos a una actividad cívica. Esta relación estadísticamente significativa con las asociaciones de padres y comunitarias puede estar influenciada por el hecho de que los factores principales que inciden en tener una Tarjeta de Solidaridad son la

pobreza y el bajo nivel educativo, y este sector social puede estar más involucrado en las asociaciones comunitarias y de padres que en las profesionales y de mujeres.

Esto sugiere que la Tarjeta está llegando a los sectores pobres para quienes fue diseñada, pero también hay un elemento de clientelismo político en su asignación, ya que ser miembro del partido de gobierno (PLD) o del principal partido opositor (PRD) aumenta la probabilidad de tener la Tarjeta, al igual que asistir a reuniones de los partidos. Sin embargo, para determinar la dirección causal se requiere más estudio, de manera que se pueda especificar en qué proporción de los casos el beneficiario de la Tarjeta se identificaba con el partido previamente y por eso tuvo mayor oportunidad de recibirla, o si recibir la Tarjeta motivó la identificación partidaria.

GRÁFICO V. DISTRIBUCIÓN DE LAS TARJETAS DE SOLIDARIDAD POR PARTICIPACIÓN CÍVICA Y POLÍTICA, 2010



* Diferencias significativas entre los que participan y los que no participan.

Fuente: Cálculos de los autores con datos del Barómetro de las Américas (LAPOP 2010).

En resumen, las correlaciones estadísticas entre las variables analizadas demuestran que hay una fuerte relación entre la participación cívica y política y ser beneficiario de ofertas clientelares. Esta tendencia también se evidencia parcialmente en el caso de la Tarjeta de Solidaridad.

En el modelo estadístico de regresión lógica que aparece en la Tabla I se evalúa si la coparticipación cívica y política que se observa en el análisis bi-variable se mantiene en el análisis multivariado, donde se introducen variables independientes para evaluar la participación en partidos políticos a través de la asistencia a reuniones de los partidos. Las variables de control son de tipo sociodemográfico (educación, edad, género, clase, raza y lugar de residencia), la evaluación de la economía nacional y la asistencia a servicios religiosos. Se asume que estas variables podrían tener algún impacto en la participación cívica. Pero si la coparticipación se mantiene a pesar de estos controles, entonces toma fuerza el argumento de que ese factor dificulta que la sociedad civil dominicana presente un desafío a la élite política de los partidos y el gobierno.

TABLA I. ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS
 (REGRESIÓN LOGÍSTICA ORDENADA)

Variable independiente	Coefficiente (β)	Errores estándar	Log-Odds ratio (e^{β})
Participación en la comunidad	,01**	(,002)	1,01
Participación en asociaciones de padres de escuela	,01**	(,002)	1,01
Participación en asociaciones profesionales	,01**	(,003)	1,01
Participación en asociaciones de mujeres	,001	(,003)	
Participación en organizaciones religiosas	-,002	(,002)	
Educación	-,01	(,01)	
Edad	-,01	(,004)	
Mujer	-,43**	(,12)	,65
Riqueza	-,18**	(,04)	,83
Identificación racial: negro	-,002	(,002)	
Identificación racial: mulato	-,001	(,002)	
Identificación racial: indio	-,002	(,002)	
Urbano	,002	(,13)	
Evaluaciones económicas nacionales	,05*	(,002)	1,01
Asistencia a servicios religiosos	-,002	(,002)	
Corte 1	-,27	(,36)	
Corte 2	,59	(,36)	
Corte 3	2,44**	(,37)	

N = 1.433

Pseudo R² = ,05

Likelihood ratio (df) = -1.429,2 (15)

* p < ,05; ** p < ,01

Fuente: Cálculos de los autores con datos del Barómetro de las Américas 2010.

Los resultados en la Tabla I confirman la coparticipación cívica y política. Los datos muestran una relación estadísticamente significativa entre las distintas formas de participación cívica y la asistencia a reuniones de partidos políticos, con excepción de la participación en organizaciones de mujeres. La variable independiente «participación en la comunidad» combina la participación en la solución de los problemas de la

comunidad y la asistencia a reuniones de juntas de vecinos. Otras variables independientes que inciden de manera estadísticamente significativa son el género y la riqueza. Las mujeres participan menos que los hombres en reuniones de partidos políticos y las personas de menor riqueza participan más que las de mayor riqueza⁵. También participan más las personas que tienen una evaluación positiva de la situación económica nacional. No se registra un efecto estadísticamente significativo en el caso de la edad, el nivel educativo, la raza y el lugar de residencia. Tampoco hay una relación significativa entre la religiosidad (asistencia a servicios religiosos) o la participación en organizaciones religiosas y la participación en reuniones de partidos políticos.

VIII. CONCLUSIÓN

Tal cual han planteado varios autores citados en este artículo, la sociedad civil dominicana tiene fuertes debilidades internas (Vargas, 1994) y existe en un entorno político de partidos estable (Morgan, Hartlyn y Espinal, 2011), clientelar (Choup, 2003, 2006) y verticalista (Vargas, 1994) que le es adverso. Los datos presentados muestran que el sistema clientelar permea la relación con los partidos políticos y el Estado. También evidencia el involucramiento de un segmento de los participantes en actividades cívicas, en actividades partidarias y redes clientelares. Por tanto, la sociedad civil no es externa a los partidos. En todos los ítems de participación cívica se registró una relación estadísticamente significativa con la asistencia a reuniones de partidos y cuando se utilizaron las variables cívicas en relación con la membresía a un partido político, se encontraron las mismas tendencias estadísticas aunque menos marcadas.

Los datos también muestran que participar en actividades cívicas y, sobre todo, en actividades partidarias aumenta la probabilidad de recibir ofertas clientelistas en tiempos de campaña electoral y beneficios públicos como las Tarjetas de Solidaridad, aunque en este último caso el beneficio no se registra en todas las actividades cívicas. Esta relación clientelar no sólo puede reducir la capacidad de presión de la sociedad civil, sino que también puede diluir la función de representación de los intereses sociales que deberían cumplir los partidos políticos. De hecho, si los partidos no cumplen con su función de intermediación, es difícil para la sociedad civil ejercer presión sobre el Estado para que atienda las demandas sociales, a menos que se organizara en grandes movimientos sociales, lo cual no ha ocurrido en República Dominicana y la población registra un bajo nivel de participación en protestas públicas.

Por su amplia base clientelar, los partidos dominicanos se enfocan en responder a los intereses particulares de sus miembros, en vez de atender los problemas más generales de la sociedad. Su poder deviene en gran medida del clientelismo o las expectativas

5. No hay un impacto estadísticamente significativo y consistente de la clase social en la participación en organizaciones cívicas. Por ejemplo, en las organizaciones profesionales participa más la clase media y en las asociaciones de padres los de menos riqueza. A nivel comunitario no hay diferencias estadísticas por nivel de riqueza.

clientelistas, y la sociedad civil queda atrapada en un sistema que es adverso a la acción colectiva como mecanismo de reconocimiento de los derechos ciudadanos.

La representatividad clientelista de los partidos en República Dominicana sigue siendo efectiva y mantiene a muchas organizaciones de la sociedad civil en posición de debilidad. El planteamiento de Hochstetler y Friedman (2008) de que el nivel de representación a través de organizaciones de la sociedad civil se relaciona con el nivel de crisis de representatividad de los partidos (a mayor crisis de los partidos, mayor involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil en la representación), se ilustra en el caso dominicano. Estas organizaciones no han logrado servir de complemento como instancias de representatividad en el sistema político por la naturaleza de la relación entre participación cívica y política, y mucho menos reemplazar a los partidos como instancias de representatividad.

A partir de los datos presentados se puede concluir que los partidos políticos dominicanos parecen succionar el poder de la sociedad civil a través del doble involucramiento de un segmento de la membresía en ambas instancias y de la cooptación vía ofertas clientelistas o beneficios públicos en un contexto político de dificultad para acceder a los beneficios por los mecanismos institucionales. Como resultado, la participación cívica no se traduce en mayor presión para conseguir reformas o en mejores gestiones gubernamentales. Esto significa que en República Dominicana no se observa el supuesto clásico de que a mayor participación cívica mejor democracia, ya que la sociedad civil no logra desafiar a los partidos y el gobierno debido a la coparticipación cívica y partidaria y al clientelismo. Una conclusión teórica de este análisis es que el nivel de participación cívica en sí mismo no es suficiente para determinar el impacto que tiene la sociedad civil en la política; la naturaleza de esa participación es crucial para comprender la dinámica y los efectos de la participación.

IX. BIBLIOGRAFÍA

- ALMOND, Gabriel y VERBA, Sydney. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1963.
- ARCE, Moisés y BELLINGER, Paul Jr. Low-Intensity Democracy Revisited: The Effects of Economic Liberalization on Political Activity in Latin America. *World Politics*, 2007 (octubre), vol. 60: 97-121.
- ARMONY, Ariel. *The Dubious Link: Civic Engagement and Democratization*. Stanford: Stanford University Press, 2004.
- BÁEZ, Clara. Democracia y movimientos de mujeres: Hacia una redefinición de los espacios políticos. *Género y Sociedad*, 1993, vol. 1, n.º 1: 1-20.
- BETANCES, Emelio. *Urban Protest Movements in the Dominican Republic*. Trabajo presentado en el XXVIII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), junio 11-14, 2009.
- BOBES, Velia Cecilia. De la revolución a la movilización: Confluencias de la sociedad civil y la democracia en América Latina. *Revista Nueva Sociedad*, 2010, n.º 227: 32-50.
- CASSÁ, Roberto. *Movimiento Obrero y Lucha Socialista en la República Dominicana*. Santo Domingo: Fundación Cultural Dominicana, 1990.

- CASSÁ, Roberto y MURPHY, Fred. Recent Popular Movements in the Dominican Republic. *Latin American Perspectives*, 1995, vol. 22, n.º 3: 80-93.
- CEARA-HATTON, Miguel. Prólogo. En OFICINA DE DESARROLLO HUMANO DEL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (ODH-PNUD) y MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. *La política social: Capacidades y derechos*. Santo Domingo: ODH-PNUD, 2010.
- CEBALLOS, José. Organizaciones y movimientos barriales: sujetos y actores sociales. *Estudios Sociales*, 1995, año 28, n.º 102: 41-68.
- CHOUP, Anne Marie. Limits to Democratic Development in Civil Society and the State: The Case of Santo Domingo. *Development and Change*, 2003, vol. 34, n.º 1: 25-44.
- CHOUP, Anne Marie. Calculated Risks: Why Civic Leaders (Re)Turn to Politics. *International Political Science Review*, 2006, vol. 27: 285-300.
- DE PEÑA VALDEZ, Julio. *Breve Historia del Movimiento Sindical Dominicano*. Santo Domingo: Ediciones Populares Dominicanas, 1998.
- DIAMOND, Larry. Toward Democratic Consolidation. *Journal of Democracy*, 1994, vol. 5, n.º 3: 3-17.
- DIAMOND, Larry. *Developing Democracy Toward Consolidation*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1999.
- DUARTE, Isis y PÉREZ, José F. Consideraciones en torno a la política represiva y asistencial del Estado Dominicano, 1966-1978. *Realidad Contemporánea*, 1979, año II, n.º 10-11: 61-77.
- ESPINAL, Rosario. *Autoritarismo y democracia en la política dominicana*. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), 1987.
- ESPINAL, Rosario. Economic Restructuring, Social Protest, and Democratization in the Dominican Republic. *Latin American Perspectives*, 1995, vol. 22, n.º 3: 63-79.
- ESPINAL, Rosario. Business and Politics in the Dominican Republic. En DURAND, Francisco y SILVA, Eduardo (eds.). *Organized Business, Economic Change, and Democracy in Latin America*. Miami: North-South Center Press, 1998.
- ESPINAL, Rosario. La sociedad civil movilizada y las reformas democráticas en la República Dominicana. *Revista Espiral: Estudios sobre Estado y Sociedad*, 2001, vol. VII. También publicado en SALAZAR PÉREZ, Robinson (ed.). *Comportamiento de la Sociedad Civil Latinoamericana*. México: LibrosenRed, 2002.
- FAXAS, Laura. El empresariado dominicano: ¿De clase dominante autoritaria a clase dirigente democrática? *Estudios Sociales*, 1995, año 28, n.º 100, abril-junio: 63-102.
- FAXAS, Laura. *El mito roto: Sistema político y movimiento popular en la República Dominicana, 1961-1990*. México: Siglo XXI, FUNGLODE y FLACSO, 2007.
- FINKEL, Steve y SABATINI, Christopher. Civic Education, Civil Society, and Political Mistrust in a Developing Democracy: The Case of the Dominican Republic. *World Development*, 2000, vol. 28, n.º 11: 1851-1874.
- FOLEY, Michael y EDWARDS, Bob. The Paradox of Civil Society. *Journal of Democracy*, 1996, vol. 7, n.º 3: 38-52.
- FRIEDMAN, Elizabeth y HOCHSTETLER, Kathryn. Assessing the Third Transition in Latin American Democratization. *Comparative Politics*, 2002, vol. 35, n.º 1: 21-42.
- FUKUYAMA, Francis. Social capital, civil society and development. *Third World Quarterly*, 2010, vol. 22, n.º 1: 7-20.
- GRUGEL, Jean. *New regionalism, new rights? Latin American regionalism as an opportunity structure for civic activism*. Working Paper n.º 19. Buenos Aires: FLACSO, 2009.
- HARTLYN, Jonathan. *The Struggle for Democratic Politics in the Dominican Republic*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1998. (Versión traducida: *La lucha por la democracia en*

- la República Dominicana*. Santo Domingo: Fundación Global Democracia y Desarrollo-FUNGLODE, 2008).
- HENGSTENBERT, Peter; KOHUT, Karl y MAIHOLD, Gunther. Estado y sociedad civil en América Latina. *D+C Desarrollo y Cooperación*, 2002, n.º 1: 8-11.
- HOCHSTETLER, Kathryn y FRIEDMAN, Elisabeth Jay. Can Civil Society Organizations Solve the Crisis of Partisan Representation in Latin America? *Latin American Politics & Society*, 2008, vol. 50, n.º 2: 1-25.
- HUNTINGTON, Samuel. The United States. En CROZIER, Michael; HUNTINGTON, Samuel y WATANUKI, Joji. *The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission*. New York: New York University Press, 1975, pp. 59-118.
- IANNI, Vanna. *Masas y revuelta*. Santo Domingo: Editora Universitaria-UASD, 1985.
- IANNI, Vanna. *El Territorio de las masas: Espacios y Movimientos Sociales en República Dominicana, Abril 1984-Abril 1986*. Santo Domingo: Editora Universitaria-UASD, 1987.
- LOZANO, Wilfredo. *El Reformismo Dependiente*. Santo Domingo: Editora Taller, 1985.
- MANZANILLO, Dennis. La sociedad civil y los partidos políticos. *Estudios Sociales*, 1999, año XXXII, n.º 117: 13-22.
- MORGAN, Jana y ESPINAL, Rosario. *Consolidación democrática en las Américas en tiempos difíciles: República Dominicana 2010*. Santo Domingo: United States Agency for International Development (USAID), a publicarse en el 2010.
- MORGAN, Jana; HARTLYN, Jonathan y ESPINAL, Rosario. Party System Continuity amid Regional Transformations: Economic Policy, Clientelistic Benefits and Migration Flows in the Dominican Republic. *Latin American Politics & Society*, a publicarse en el 2011.
- MOYA PONS, Frank. *Empresarios en conflicto*. Santo Domingo: Fondo para el Avance de las Ciencias Sociales, 1992.
- NÚÑEZ COLLADO, Agripino. *La cultura del diálogo y la concertación en República Dominicana, 1985-1997*. Santo Domingo: Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), 1997.
- OFICINA DE DESARROLLO HUMANO DEL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (ODH-PNUD) y MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. *La política social: Capacidades y derechos*. Santo Domingo: ODH-PNUD, 2010.
- OVIDEO, José y ESPINAL, Rosario. *Democracia y proyecto socialdemócrata en la República Dominicana*. Santo Domingo: Editora Taller, 1986.
- PÉREZ, César y ARTELES, Leopoldo. *Movimientos sociales dominicanos. Identidad y dilemas*. Santo Domingo: Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 1992.
- PUTNAM, Robert. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press, 1993.
- PUTNAM, Robert. Bowling Alone: America's Declining Social Capital. *Journal of Democracy*, 1995, vol. 6, n.º 1: 65-78.
- REVILLA BLANCO, Marisa. América Latina y los movimientos sociales: el presente de la «rebelión del coro». *Revista Nueva Sociedad*, 2010, n.º 227: 51-67.
- SABATINI, Christopher. Whom do international donors support in the name of civil society? *Development in Practice*, 2002, vol. 12, n.º 1: 7-19.
- TARROW, Sidney. *Power in Movement: Social Movements, Collective Action and Politics*. Melbourne, Australia: Cambridge University Press, 1994.
- TAYLOR, Charles. Modes of Civil Society. *Public Culture*, 1990, vol. 3, n.º 1: 95-132.
- TOCQUEVILLE, Alexis de. *Democracy in America*. Traducido y editado por MANSFIELD, Harvey C. y WINTHROP, Delba. Chicago: University of Chicago Press, 2000 (1840).
- TORIBIO, Rafael. Relación sociedad civil y partidos políticos. *Estudios Sociales*, 1999, año XXXII, n.º 117: 7-12.

- TUSALEM, Rollin F. A Boon or a Bane? The Role of Civil Society in Third –and Fourth– Wave Democracies. *International Political Science Review*, 2007, vol. 28, n.º 3: 361-386.
- UHLIN, Anders. Which Characteristics of Civil Society Organizations Support What Aspects of Democracy? Evidence from Post-Communist Latvia. *International Political Science Review*, 2009, vol. 30, n.º 3: 271-295.
- VALENZUELA, Arturo. Latin American Presidencies Interrupted. *Journal of Democracy*, 2004, n.º 4: 5-19.
- VARGAS, Tahira. Las organizaciones de base en Santo Domingo. *Estudios Sociales*, 1994, año XVII, n.º 97: 91-112.
- WARREN, Mark. *Democracy and Association*. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2001.
- ZAIDI, S. Akbar. An Emerging Civil Society? *Journal of Democracy*, 2008, vol. 19, n.º 4: 38-40.